TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil Familia

Bogotá D.C., cinco de junio de dos mil veintitrés

Referencia: 25899-31-03-001-2022-00097-01

Se decide el recurso de apelación formulado contra el auto que el Juzgado 2º Civil del Circuito de Zipaquirá profirió el 22 de febrero de 2021, dentro del proceso ejecutivo que Bancolombia S.A inicialmente siguió contra Carolina Duran Castillo y Juan Guillermo Burgos Ramírez.

ANTECEDENTES

1. La entidad bancaria radicó la demanda el 15 de diciembre de 2017, escrito inicial en el que pidió el recaudo forzoso de los instrumentos cambiarios que ascienden a \$90.220.364 y \$12.270.542, cuya orden de apremio se dictó el 7 de febrero de 2018.

El ejecutado Burgos Ramírez se consideró notificado mediante auto de 24 de enero de 2020; por su parte la ejecutada Duran Castillo confirió poder a su abogada de confianza y con posterioridad presentó una petición fundada en el artículo 121 del Código General del Proceso, a través de la cual pidió que el fallador declarara su falta de competencia y decretara *“...la nulidad de pleno derecho, de toda la actuación posterior al año de la notificación del mandamiento de pago, es decir, a partir del 13 de septiembre del año 2019”*.

2. El juez, a través del auto apelado, dispensó la falta de competencia y de contera remitió el expediente al Juzgado 1º Civil del Circuito de Zipaquirá; de otra parte no declaró la invalidez implorada porque *"...no hay actuación posterior al 14 de septiembre de 2019, fecha en la cual se venció el término para resolver la instancia, que declarar nula, pues la expresión "de pleno derecho" que contenía el inciso sexto el artículo 121 del C.G.P., fue declarada inexecutable en la aludida sentencia de constitucionalidad, luego, como las partes no lo alegaron oportunamente, al punto que, tanto el apoderado actor, como la apoderada de la pasiva actuaron con posterioridad al vencimiento del término que contempla la norma sin alegar su configuración, cualquier eventual nulidad que se hubiere podido configurar por dicha causal, estaría saneada"*

3. La demandada, presentó recurso de apelación con el exclusivo propósito de que se revoque parcialmente el auto descrito, ya que no comparte que se hubiese denegado la anulabilidad que pidió, pues ese efecto debe cobijar a las actuaciones a la luz del artículo 121 del Código General del Proceso; y señaló que *"no actuó procesalmente después del 14 de septiembre de 2019, sino hasta que se presentó la solicitud de la aplicación del artículo 121 Código General del Proceso"*; razón por la cual, en su criterio, no operó el fenómeno de convalidación frente a ella y, por ende, *"podría alegar la nulidad de lo actuado desde el vencimiento del término el 14 de septiembre de 2019, ya que no existe actuaciones procesales de ella antes en el proceso y además está dentro de la oportunidad legal por no haberse dictado sentencia en el proceso"*.

4. El Juzgado 1º Civil del Circuito de Zipaquirá, el 8 de noviembre de 2022 concedió la alzada en el efecto devolutivo (archivo 55) y remitió el expediente a este cuerpo colegiado mediante oficio de 20 de abril de 2023.

CONSIDERACIONES

Comporta relieves que la apelación solo fustigó el pronunciamiento que denegó la nulidad del artículo 121 del Código General del Proceso, de donde se sigue que el estudio que se adelantará se limitará a ese preciso asunto, máxime cuando la pérdida de competencia dispensada en aquella providencia fue admitida por los intervinientes.

Ahora bien, uno de los argumentos que destinó el juez para no decretar la consabida invalidez fue que quedó saneada porque no fue alegada por la entidad acreedora y por uno de los deudores, ya que, tanto *“el apoderado actor, como la apoderada de la pasiva actuaron con posterioridad al vencimiento del término que contempla la norma sin alegar su configuración”*.

Ese raciocinio no lo compartió la ejecutada Carolina con sustento en que las gestiones jurídicas cumplidas con posterioridad de la nulidad de juzgamiento no provienen de ella, ya que emanan del demandando Juan Guillermo y de la parte ejecutante, escenario que contextualizó para indicar que sobre ella no converge la convalidación de aquella invalidez y de contera puede invocarla.

A decir verdad, lo expuesto por la antedicha obligada cambiaria no armoniza con algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, si se tiene que su Sala de Casación Civil -en casos particulares- admitió que la convalidación de la nulidad descrita, no solo cobija al participante que no la invocó, sino que también se extiende a los demás intervinientes.

Respecto de lo cual la Sala de Casación Civil en la sentencia SC845-2022 anotó que *“puede concluirse, entonces, que la nulidad que consagra el artículo 121 es saneable. Sin embargo, debido el peculiar diseño legislativo de ese precepto, ese saneamiento se produce cuando las partes invocan -justificadamente- la pérdida de competencia del juez o magistrado cognoscente, y a renglón seguido permiten que ese mismo funcionario continúe tramitando la causa hasta dictar sentencia, sin solicitar la invalidación de lo actuado”*.

Y en un caso parecido la Corte Suprema de Justicia en la providencia STC89-2022 señaló que: *“en ese sentido, indicó que, “si trascurrido el término para dictar sentencia las partes adelantan actuaciones sin solicitar la pérdida de competencia, no hay lugar a reclamar la nulidad, pues ya se encuentra saneada, en atención al principio de preclusión.*

...a su vez, argumentó que, en virtud del control de legalidad dispuesto en el artículo 132 del CGP, el juicio se debe revisar con la finalidad de evidenciar posibles irregularidades que luego no se podrán alegar, dado que el artículo 133 ibidem establece que las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos contemplados en dicho estatuto.

...3. Para la Sala, la determinación cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jurídico, por cuanto fue proferida después de haberse realizado una valoración razonable de las probanzas respectivas, la normatividad que gobierna el asunto y la jurisprudencia constitucional relacionada.

...en ese orden, el accionado analizó las actuaciones del proceso a la luz de lo decantado por la jurisprudencia sobre el artículo 121 del CGP, estableciendo que, una vez expirado el término para fallar, si el juzgado realiza actuaciones que no son impugnadas oportunamente o la parte ha actuado sin

proponer la nulidad, la irregularidad se sana, pues aquél vicio no solo debe ser alegado antes de dictar sentencia sino que, frente a él, son aplicables las reglas de saneamiento del artículo 136 del Código General del Proceso”.

Por manera que la nulidad implorada quedó convalidada, no solamente porque la sede demandante actuó en el litigio luego de la nulidad del precepto 121 de la Ley 1564 de 2012, sino a su vez porque una de las personas que integra la parte demandada, a saber, Juan Guillermo, también participó en la causa después de configurado el yerro denunciado, cuya gestión a propósito consistió en la radicación y gestiones seguidas dentro del incidente de nulidad que inició para advertir su defectuoso enteramiento.

A partir de ese panorama, donde la parte actora y un demandado actuaron en el litigio sin proponer la invalidez examinada, suena lógico que la convalidación admitida por esos participantes asimismo cobijó a la recurrente, máxime cuando la ratificación del yerro a su vez provino de uno de los ejecutados.

Por manera que es razonable el raciocinio de la primera instancia, en consideración a que, al ser saneable la nulidad ponderada, el silencio que frente a la misma mantuvieron el ejecutante y uno de los ejecutados durante el proceso, convalidó la actuación, lo que impedía a los afectados reparar sobre el vicio examinado.

De otra parte, como se anunció en la primera instancia, no habían actuaciones que anular cuando el juez 2º de Zipaquirá

declaró su falta de competencia, por lo que resultaba inane acceder a la invalidez pregonada, debiéndose advertir que de accederse a ese anhelo ello prohiaría la actitud dilatoria de la abogada de la recurrente, ya que luego del auto apelado el proceso arribó a otra sede judicial -con ocasión de esa falta de competencia- y, por consiguiente, la anulabilidad provocaría el quiebre de sendas actuaciones seguidas por esa última judicatura.

Lo cual exige conferir prevalencia al derecho sustancial que a la disposición procesal condensada en el canon 121 del Código General del Proceso; al respecto conviene memorar lo dicho en el fallo de tutela STC-14449-2019: *"cabe destacar que los funcionarios judiciales, deben en sus actuaciones dar prevalencia al derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política y replicado en el canon 11 del Código General del Proceso, conforme al cual «el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial... esta Corporación ha ilustrado: «(...) [R]ecordemos que el derecho procesal es medio y no fin, [y] (...) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (...). Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (...)»*

"(...) [L]a relación de medio a fin es ostensible, lo que hace ver que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoci[ó] principios generales del derecho procesal, los cuales deben estar para cumplir la garantía constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pretéritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislador ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes' (art. 4º, C. de P. C.)» (SC 27 abr. 2006, 2006-

00480-01; reiterada recientemente en STC8971-2017, 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).

En definitiva, se confirmará la determinación censurada.

DECISIÓN¹

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, **confirma** el auto apelado. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado electrónicamente
JAIME LONDOÑO SALAZAR
Magistrado

¹ Para la resolución de la presente actuación se conformó el respectivo expediente de manera virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha actuación podrá ser consultada a través del link: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/EtaUhDu6hmVFpp-dG_w2RlsBnd9t0y4sK9E70ywD13o6Cg?e=btTrlv

Firmado Por:
Jaime Londono Salazar
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **650896acd73cd01b15b1073253bcee798002bd4d9dffeace55ee3f43b44baade**

Documento generado en 05/06/2023 11:17:46 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>